

**JUICIO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL**

EXPEDIENTES: ST-JRC-22/2009 Y
ST-JRC-29/2009 ACUMULADOS.

ACTORES: COALICIÓN “PAN-ADC,
GANARÁ COLIMA” Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE COLIMA.

TERCEROS INTERESADOS:
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA
ALIANZA, Y COALICIÓN “PAN-ADC,
GANARÁ COLIMA”.

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA
M. FAVELA HERRERA.

**MAGISTRADO ENCARGADO DEL
ENGROSE:** SANTIAGO NIETO
CASTILLO.

SECRETARIO: CÉSAR AMÉRICO
CALVARIO ENRÍQUEZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a **diecisiete de
septiembre de dos mil nueve.**

V I S T O S para resolver los autos de los juicios de
revisión constitucional electoral al rubro indicados, promovidos
por la **Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”** y el **Partido
Revolucionario Institucional**, respectivamente, en contra de la
resolución de veintitrés de julio de dos mil nueve, dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Colima, en los recursos
de inconformidad identificados con las claves **RI-27/2009 y**

RI-30/2009 ACUMULADOS, relacionados con la elección local de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral número VIII, con sede en Villa de Álvarez, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima” y el Partido Revolucionario Institucional hacen en sus demandas, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Jornada electoral. El cinco de julio de dos mil nueve se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros cargos, a los **diputados por el principio de mayoría relativa que integrarán el Congreso del estado de Colima.**

[...]

VIII. Engrose. El proyecto se listó, para su discusión y votación en sesión pública convocada para el diecisiete de septiembre del presente año; sin embargo, fue rechazado por mayoría de dos votos, encargándose su engrose al Magistrado Santiago Nieto Castillo; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. [...]

SEGUNDO. Acumulación. [...]

TERCERO. Causas de improcedencia. [...]

CUARTO. Requisitos de las demandas y especiales de procedencia. [...]

QUINTO. Terceros interesados. [...]

SEXTO. Resolución impugnada. La resolución impugnada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

[...]

SEXTO. Agravios. En el escrito de demanda la coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”, manifiesta como agravios, lo siguiente:

“AGRAVIOS

*I.- El **primer agravio** que nos causa la resolución que se recurre, es el hecho de que en el Considerando DÉCIMO que a la letra se transcribe en lo conducente dice:*

[...]

*De la transcripción anterior resulta obvio que el Tribunal Electoral **no dio la justa dimensión jurídica al Agravio** consistente en que la votación relativa a la elección de diputado local por el distrito VIII del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibida en la **casilla 163-E1** debe ser anulada, en razón de que (1) **medió error grave o dolo manifiesto en el cómputo de votos** que beneficia al candidato común del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza y de que (2) **existieron irregularidades graves en el acta de escrutinio y cómputo que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación**, por lo que se actualizan las*

causas de nulidad contempladas en el artículo 69, fracciones VIII y XII, LESMIME, que establece lo siguiente:

[...]

*II.- Causa un **SEGUNDO AGRAVIO** a la Coalición que represento, la resolución que se recurre por establecer en el APARTADO B) (SIC), lo siguiente:*

[...]

*De la transcripción anterior se desprende que **el Tribunal Electoral del Estado, de manera ilegal desestima la probanza ofrecida por nuestra parte y no le da ningún valor probatorio, es más ni siquiera la considera**, ya que en el apartado de nuestras probanzas, se ofreció además del Acta de la Jornada Electoral, la hoja de incidentes que levantó la secretaria de la mesa directiva de casilla 163 C6, en donde claramente determina que 18 personas votaron sin aparecer en el listado nominal; por lo que una vez que el Tribunal Electoral hace el análisis de quiénes pueden sufragar su voto, termina estableciendo en este apartado que su resolución la basa en el hecho de que el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral hace la aclaración en el oficio número CS/028/2009 de fecha 20 de julio del 2009 que fue una irregularidad, sin precisar de quién, o cómo se dio esta irregularidad, por lo que no fundamenta claramente y mucho menos motiva su resolución.*

Existe además incongruencia en la resolución impugnada, ya que por un lado, nos otorga la razón al advertir que hubo irregularidades en esta casilla que pueden ser causa de nulidad y por otro lado,

considera que no es determinante, tal como lo señala en la hoja 50 párrafo penúltimo de la resolución que se impugna por lo que no es posible, que por un lado nos conceda la razón, por otro desestime nuestra probanza y se basa simplemente en la supuesta aclaración que hace el Secretario del Consejo, y va más allá la autoridad electoral al determinar en la página 52 último párrafo, que la supuesta irregularidad de sufragar 18 personas sin aparecer en el listado nominal, quedó debidamente aclarado, cuando no fue así ya que en la sesión del 10 de julio del 2009 no se aclaró esta situación ni tampoco se asentó nada al respecto en el Acta de la Sesión Permanente de Cómputo del VIII distrito electoral, por lo que si con posteridad al Acto de cómputo lo aclaró el Secretario del Consejo Municipal, es evidente que lo hace en forma ilegal y fuera de las facultades que la ley le confiere, violentando el procedimiento electoral, pues su actuación no está contemplada en la legislación electoral local; por lo tanto subsiste la materia de Agravio y resulta nuevamente infundada y motivada de manera irregular totalmente la resolución del Tribunal Electoral al determinar que el AGRAVIO formulado por las Coalición a la que represento es INFUNDADO e INOPERANTE.

[...]"

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional manifiesta como motivos de disenso, lo siguiente:

“AGRAVIOS

PRIMERO.- Es de mayor importancia y relevancia jurídica señalar, que resulta extraordinario que la Autoridad Responsable haya pasado por alto un

presupuesto Procesal como lo es la **Legitimación y Personería**, que constituyen por parte de la autoridad el reconocimiento para actuar como parte dentro de todo proceso jurídico, y por ende en **Materia Electoral**; luego entonces debe modificarse la sentencia recurrida respecto a la admisión del recurso de inconformidad 30/2009, de la recurrente **COALICIÓN "PAN-ADC, GANARÁ COLIMA"** toda vez que el promovente no acreditó debidamente la personalidad con la que le permitió comparecer la responsable en tal medio de impugnación, siendo insuficiente la circunstancia o hecho de que el promovente haya exhibido el documento que lo acredita como comisionado de la coalición PAN ADC, "Ganará Colima" ante el Consejo General del Instituto General del Estado de Colima, pues dicho documento no es idóneo, ni eficaz para acreditar la legitimidad necesaria para promover el recurso de inconformidad en contra de actos o resoluciones que fueron emitidos por una autoridad electoral diversa al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima; como lo es en el presente caso el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, quien emitió el acto primigenio impugnado; por lo tanto tales presupuestos procesales debieron haberse estudiado suficientemente para proveer sobre el desechamiento del recurso de inconformidad 30/2009 mencionado; y no como la responsable actuó, pues indebidamente reconoció personalidad al promovente de la coalición "PAN-ADC, Ganará Colima", inclusive como Representante Legal ante el Consejo Municipal Electoral de Villa de Álvarez, Colima mismo que consta en el considerando segundo, inciso D, foja doce de la resolución combatida; sin que exista en autos documento alguno que

acredite tal carácter, además de corroborarse con el propio documento en que basa su personería y legitimidad la recurrente, por tales motivos la responsable en su ilegal resolución contraviene lo dispuesto en los numerales 9, fracción I y 58 fracción I, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en que la responsable fundamenta el acto de reconocimiento ante su esfera jurídica de competencia, erróneamente valorado.

[...]

Por lo expuesto, es evidente que debió haberse desechado el multicitado recurso de inconformidad.

SEGUNDO.- Me causa agravio el hecho que el Tribunal Electoral del Estado de Colima, haya resuelto en su escrito *resolutivo a foja 26, respecto a la Casilla 163 E1 C3, en el que aduce: “Pues si bien es cierto que en el acta de la jornada electoral de la casilla 163 E1 C3 en el espacio destinado para instalación de la casilla aparece como domicilio Salvador Pérez Mancilla No. 163, Villas Rancho Blanco, Código Postal 28983, también lo es que ello no significa que se trate de un lugar distinto al autorizado por el Consejo Municipal de Villa de Álvarez”, para lo cual es necesario precisar que según el encarte la casilla en comento debió ubicarse en ESCUELA PRIMARIA FORD NÚMERO 163, INGENIERO JAVIER REZA OROZCO; en CALLE SALVADOR PÉREZ MANCILLA NÚMERO 715, FRACCIONAMIENTO VILLAS RANCHO BLANCO, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, CÓDIGO POSTAL 28983; ENTRE LAS CALLES TRINIDAD OLMOS MENDOZA Y CARLOS TÉLLEZ PIMENTEL, ahora bien según se puede constar por este H. Tribunal Electoral, en la misma se*

asienta, que se instaló en **SALVADOR PÉREZ MANCILLA NÚMERO 163, VILLAS RANCHO BLANCO, VILLA DE ÁLVAREZ COL. C.P. 28983**, pero sin asentarse justificadamente la razón de haberse ubicado en domicilio distinto al establecido legalmente, es decir, se incumple con el principio de certeza de la votación en la casilla, sin que obre alguna causa justificada que se desprenda de la propia acta, ni de la hoja de incidentes. Ahora bien en la hoja de incidentes se anotó como lugar de instalación en la calle **SALVADOR PÉREZ MANCILLA NÚMERO 163, VILLAS RANCHO BLANCO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA C.P. 28983**, para la cual es necesario mencionar que de su simple lectura no es mismo domicilio al señalado por el encarte, puesto que debió haberse instalado en el lugar que ocupa el número 715, lugar donde se ubica la escuela Primaria Ford, mientras que en el acta de la jornada electoral de dicha casilla y en la hoja de incidentes se asienta que fue en el número 163 de la calle SALVADOR PÉREZ MANCILLA, e incluso no se hace mención de ningún punto de referencia que pudiese habernos indicado que el lugar en el que se instaló la casilla en comento fuera el designado en el encarte, porque hubiese bastado la mención de un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se instaló dicha casilla, o mediante la mención de elementos que pudiera ser útiles para tal objetivo, o la descripción de signos externos del lugar, que fuesen suficientes para evitar confusiones al electorado, como para asegurar que ante la amplia distancia que existe entre el número asentado en el acta y el número en que se ubica la escuela primaria Ford, y el lugar de instalación de la casilla 163 E1 C3 fue el mismo. Por tal razón es que la hipótesis ya descrita encuadra en la causa de nulidad

de la votación recibida, prevista en el artículo 69 fracción I de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación Materia electoral, en relación con lo previsto por los artículos 248 y 249 fracción VI del Código Electoral del Estado de Colima, transcritos para su ilustramiento en el agravio anterior.

[...]

TERCERO. Me causa agravio el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado de Colima, haya resuelto en el CONSIDERANDO SÉPTIMO a fojas de la treinta y tres a la cuarenta y tres de la resolución impugnada lo siguiente:

[...]

*Luego de la transcripción del considerando que me causa agravio es importante señalar que **la autoridad responsable minimiza la irregularidad presentada** en las casillas 164 C1 y 164 C2 consistente en el hecho de que personas distintas y no autorizadas fungieron como funcionarios de casilla, sin seguirse el procedimiento de corrimiento correspondiente previsto por el numeral 250 del Código Electoral del Estado de Colima y sin haberse asentado causa alguna que justifique la razón de que las ciudadanas MARÍA SOCORRO FIGUEROA MORALES Y GEORGINA SILVA MARTÍNEZ hayan desempeñado las funciones de secretario en casillas que no les correspondían tal y como se demuestra con las documentales públicas que obran en autos y referidas por la responsable en el considerando citado; respecto a la casilla 164 C 1 se señala el hecho respecto a las funciones de Secretaria en la cual estaba facultada la C. MARÍA SOCORRO FIGUEROA MORALES, y sin embargo*

realizó de manera ilegal esta función la C. GEORGINA SILVA MARTÍNEZ, durante toda la jornada electoral misma que no estaba designada por la autoridad electoral correspondiente para ocupar el cargo ni de propietario ni suplentes en dicha casilla, por lo que realizó dicha función de manera ilegal; siendo que la C. MARÍA SOCORRO FIGUEROA MORALES, debió haber realizado la función de secretario, violando totalmente la disposición establecida en el artículo 69 fracción III de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Siendo estos hechos determinantes para el resultado final de la elección que se impugna, en razón de que estas circunstancias y conceptos descritos lesionan el sentido de la elección en esta casilla; con relación a la casilla 164 C2 se señala el hecho respecto a las funciones de Secretario en la cual estaba facultada la C. GEORGINA SILVA MARTÍNEZ, y sin embargo realizó de manera ilegal esta función la C. MARÍA SOCORRO FIGUEROA MORALES, durante toda la jornada electoral misma que no estaba designada por la autoridad electoral correspondiente para ocupar el cargo ni de propietario, ni suplente en dicha casilla, por lo que realizó dicha función de manera ilegal; siendo que la C. GEORGINA SILVA MARTÍNEZ, debió haber realizado la función de secretario, como consecuencia de lo anterior se violó totalmente lo establecido en el artículo 69 fracción III, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Siendo estos hechos determinantes para el resultado final de la elección que se impugna, en razón de que estas circunstancias y conceptos descritos lesionan el sentido de la elección en esta casilla.

El actuar de la responsable al emitir tan lamentable resolución, viola lo dispuesto en los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el artículo 3 del Código Electoral del Estado de Colima; pues avala que no se cumpla con los principios rectores del Derecho Electoral, como son: Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad.”

SÉPTIMO. Precisión de la litis. No serán materia de pronunciamiento las consideraciones hechas por el tribunal responsable respecto de las causales de nulidad planteadas por los actores en los recursos de inconformidad primigenios, respecto de las casillas 152 C1; 155 B; 155 C1; 161 C2; 163 C4; 163 E1 C3; y 163 E2 C1, atento que en su contra los accionantes no enderezan agravio alguno en sus escritos de demanda, por lo que dichos posicionamientos deberán seguir rigiendo el sentido del fallo sujeto a revisión en esta instancia, en sus términos.

OCTAVO. Estudio de fondo. Previo al análisis de los argumentos planteados en las demandas, es importante destacar que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos, principalmente, en los artículos 41, fracción VI; y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 3, apartado 2, inciso d); y 86, de la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre dichos principios destaca el hecho de que, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la ley adjetiva federal de la materia, **en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente**, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho que impide a este órgano jurisdiccional electoral suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando los mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, permitiéndose únicamente al tribunal del conocimiento resolver con sujeción estricta a los agravios expuestos por el enjuiciante, siguiendo las reglas establecidas en el Libro Cuarto, Título Único, de la mencionada Ley.

Ello, pues si bien es cierto que para la expresión de agravios se ha admitido que ésta puede tenerse por formulada, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, como en el caso en que están ubicados en el apartado relativo a los hechos, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismos o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne; también lo es que, como requisito indispensable, aquéllos deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnada, así como los motivos que

originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por el actor, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.

Lo afirmado encuentra apoyo en el criterio jurídico contenido en la tesis de jurisprudencia emitida por la propia Sala Superior, publicada en las páginas veintiuno y veintidós de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen Jurisprudencia, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.

En atención a lo previsto en los artículos 2º., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.”

Sentado lo anterior, esta Sala Regional procede al análisis de la cuestión de fondo sometida a su jurisdicción.

Para ello y por cuestión de método, se estudiará en primer término el agravio identificado por el Partido Revolucionario Institucional en el **ST-JRC-29/2009**, con el ordinal **Primero**, **en el que cuestiona la personería del representante que interpuso el recurso de inconformidad de origen a nombre de la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”, toda vez que, de resultar fundado, sería suficiente para modificar la sentencia reclamada**, en el sentido de desechar de plano el citado recurso primigenio, **lo que haría innecesario abordar el estudio de los restantes planteamientos** del instituto político actor, **al haber resultado triunfador**, junto con Nueva Alianza Partido Político Nacional, en la elección de diputados locales que nos ocupa.

Al efecto, **aduce el enjuiciante, sucintamente, que el ciudadano Manuel Ahumada de la Madrid, quien se ostentó como comisionado propietario de la citada Coalición ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima y representante legal de la Coalición, no tiene la personería exigida por la legislación estatal en la materia, para interponer el recurso de inconformidad que dio origen al presente medio de impugnación**, por lo que debió ser desechado por el tribunal

responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 32, fracción IV, en relación con la diversa fracción III del artículo 33, de la ley procesal electoral de dicha entidad federativa.

El agravio previamente sintetizado es **infundado**, pues contrariamente a lo afirmado por el partido político actor, los comisionados de la Coalición "PAN-ADC, GANARÁ COLIMA" ante el Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa, sí estaban facultados para interponer los recursos de inconformidad ante el tribunal electoral responsable, como se demuestra a continuación.

El artículo 9, fracción I, inciso a) de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Colima, se refiere a la representación legal de los partidos políticos de manera individual; en tanto que para el caso de las coaliciones se ajusta la fracción II, del indicado numeral, que a la letra dice (énfasis añadido):

"Artículo 9º.- La interposición de los recursos corresponde a:

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS y asociaciones políticas a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto, acuerdo o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; y

b) Los miembros de los comités estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido.

II. Las coaliciones a través de sus representantes legítimos en los términos del convenio de coalición respectivo, aprobado por el Consejo General del INSTITUTO;

(...)”

En el caso concreto, la fracción II del numeral citado, prevé específicamente el supuesto aplicable al caso concreto; esto es, que para las coaliciones, la interposición de los recursos corresponde a sus representantes legítimos en los términos del convenio de coalición respectivo; que en el supuesto a estudio, fuera aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante resolución de fecha veintisiete de marzo del año que corre; por lo que el actor parte de una premisa equivocada, al omitir tomar en consideración que la fracción I, incisos a) y b) del artículo 9, de la ley en cita, se refiere exclusivamente a los representantes legítimos de partidos políticos y asociaciones políticas.

Por su parte, el artículo 58, fracción I, del ordenamiento legal en cita, establece:

“Artículo 58. Podrán interponer recurso de inconformidad:

I. Los partidos políticos o la coalición, a través de sus representantes legítimos.”

De lo trasunto, se colige que el recurso de inconformidad puede ser instado por los partidos políticos o coaliciones a través de sus representantes legítimos.

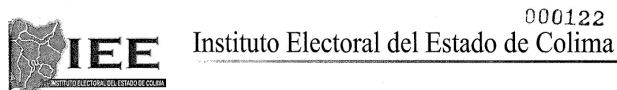
En la especie, el recurso primigenio fue interpuesto por Manuel Ahumada de la Madrid, en su carácter de comisionado propietario de la coalición "PAN-ADC, Ganará Colima" ante el Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa; sustentando su actuar, en el convenio de coalición celebrado entre los partidos Acción Nacional y Asociación por la Democracia Colimense; convenio que se invoca como un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; cuya cláusula novena, señala (énfasis añadido):

[...]

En este sentido, se destaca que en tratándose de coaliciones, por regla general, se debe atender en primer término a lo dispuesto en el convenio de coalición atinente, a fin de conocer quiénes son los representantes acreditados para tal efecto; es decir, dentro de un medio de impugnación en el que una coalición sea parte, el juzgador debe acudir a lo dispuesto en el convenio de coalición, a fin de tener por acreditado al promovente, en conformidad con lo establecido en dicho acuerdo de voluntades.

En la especie, como ha quedado apuntado, el juicio que ahora se resuelve y el primigenio, fueron promovidos por

Manuel Ahumada de la Madrid, en su carácter de comisionado propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, y como representante legal de dicha Coalición, sustentando su actuar en el convenio ya referido, de cuya cláusula novena se advierte con claridad en quién recaería la personería a efecto de interponer los medios de defensa atinentes; lo que de igual forma se desprende del original de la constancia expedida por el consejero secretario ejecutivo del Consejo General de ese Instituto, de fecha trece de julio del año en curso, documental pública con valor probatorio pleno, en conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que para mayor claridad se reproduce:



--- EL QUE SUSCRIBE, CON EL CARÁCTER DE CONSEJERO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 166, FRACCIONES VIII Y X DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, HACE ---

--- C O N S T A R ---

--- QUE SEGÚN DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO, EL C. MANUEL AHUMADA DE LA MADRID TIENE ACREDITADA SU PERSONALIDAD ANTE ESTA AUTORIDAD ELECTORAL COMO COMISIONADO PROPIETARIO DE LA COALICIÓN "PAN-ADC, GANARÁ COLIMA" ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, ASÍ COMO LA DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA COALICIÓN, EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE AMBOS PARTIDOS POLÍTICOS. ---

--- SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL., A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. ---


Secretaría Ejecutiva
LIC. JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO.
CONSEJERO SECRETARIO EJECUTIVO

De dicha documental pública se colige que Manuel Ahumada de la Madrid sustentó su actuar en el juicio natural y ante este órgano de control constitucional, en su calidad de representante de la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”, ante el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima, y en su carácter de representante legal de la citada Coalición, con apoyo en la citada cláusula novena del convenio de coalición referenciado.

En concepto de esta Sala Regional, en dicho convenio de coalición se estableció con claridad, quiénes estaban facultados para instar los medios de defensa tanto locales como federales; por lo que, conforme a una interpretación sistemática de los numerales 9, fracción II y 58, fracción I, de la ley procesal electoral del estado de Colima, se desprende que era dable la promoción de la instancia anterior con el carácter con el que se ostentó el impetrante, puesto que se encontraba facultado para tales efectos; razones por las que en la especie, también se surte la hipótesis normativa prevista en el numeral 88, párrafo 1, inciso b) de la ley adjetiva electoral federal al promover el juicio de mérito, quien a su vez instó el recurso de inconformidad previsto en la legislación procesal electoral del estado de Colima, conforme a los preceptos de la ley procesal electoral de dicha entidad federativa, señalados con antelación.

No pasa inadvertida para esta Sala Regional la afirmación del accionante en el sentido de que Manuel Ahumada de la Madrid, acreditado como comisionado propietario de la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima” ante el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, sólo puede impugnar resoluciones del referido Consejo, mas no así el cómputo distrital de la elección para diputado local por el VIII distrito electoral local, con residencia en Villa de Álvarez, Colima, puesto que no está acreditado ante el Consejo Municipal, ya que si bien lo ordinario es que los representantes partidistas actúen ante el órgano administrativo electoral ante el que estén acreditados, conforme a lo previsto en los numerales 162 y 176 del Código Electoral de aquella entidad federativa; lo cierto es que, en el caso concreto, es imprescindible atender a lo previsto en el convenio de coalición, cuya cláusula novena faculta también a los comisionados de la coalición ante el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima, para interponer los medios de defensa en materia electoral; y no sólo a los comisionados ante los consejos municipales, quienes en concepto del instituto político actor, eran los únicos facultados para interponer el recurso de inconformidad; puesto que como ya se dijo, la citada cláusula debe ser interpretada de manera extensiva, mas no limitativa; aunado a que como ya quedó establecido, el promovente es el representante legal de la coalición referida, conforme a la certificación expedida por la autoridad administrativa electoral; por lo tanto facultado para tal fin; de ahí que carezca de sustento el aserto del actor.

[...]

En vía de consecuencia, si dicho representante es quien promovió el juicio de revisión constitucional número ST-JRC-

29/2009 que ahora se resuelve de manera acumulada; con fundamento en el artículo 88, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como ya se dijo, su calidad se encuentra satisfecha; razones por las que este órgano de control constitucional estima **infundado** el motivo de disenso.

Por otra parte, en su agravio identificado con el ordinal **Segundo**, el partido político accionante acusa afectación a su esfera jurídica por parte del tribunal responsable, al desestimar su agravio relativo a que la “Casilla 163 E1 C3” fue instalada en lugar distinto al autorizado.

[...]

Finalmente, en el agravio que identifica con el ordinal Tercero, afirma el instituto político enjuiciante que la responsable, al analizar el agravio en que acusó la indebida recepción de la votación por personas distintas a las facultadas legalmente, en las casillas identificadas como **164 C1** y **164 C2**, violenta lo dispuesto en los artículos 41 y 115 de la Constitución General de la República; así como los diversos numerales 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3 del Código Electoral de dicha entidad federativa, pues en la primera de ellas actuó como secretaria la ciudadana Georgina Silva Martínez, cuando estaba autorizada para hacerlo en la segunda de las casillas referidas, mientras que en ésta actuó la ciudadana María Socorro Figueroa Morales, autorizada para actuar como tal en la primera, lo que en su

concepto constituye una franca violación al procedimiento de corrimiento previsto en el artículo 250 del código comicial local.

El agravio antes sintetizado es **inoperante**, pues constituye una reiteración de los argumentos planteados ante el tribunal responsable.

En efecto, del escrito de demanda del recurso de **inconformidad** interpuesto por el partido político actor, al que correspondió el número de expediente RI-27/2009, visible en original a fojas 1 a 21 del Cuaderno Accesorio Único del juicio ST-JRC-22/2009, **se aprecia que el citado instituto político, al referirse a la causal de nulidad invocada expuso**, respecto de la casilla identificada como **164 C1**, lo siguiente (énfasis añadido):

[...]

Al respecto, el tribunal responsable sostuvo en su resolución, sucintamente, que:

[...]

De ahí que, como se dijo, si los argumentos expuestos a manera de agravio en esta instancia constituyen la mera repetición de los analizados por la autoridad responsable, **deben ser calificados como inoperantes**, dada la imposibilidad que este órgano de impartición de justicia federal tiene para contrastar las consideraciones torales que sustentan el fallo impugnado, con otros que pudieran general la convicción suficiente en el sentido de que se encuentran apegadas a derecho o no.

Procede abordar a continuación los planteamientos formulados por la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima" a manera de agravio, los cuales hace consistir, esencialmente, en lo siguiente:

a) Que la responsable no dio la justa dimensión jurídica al agravio en que hizo valer la causal de nulidad prevista en el artículo 69, fracciones VIII y XII, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Colima, relativa a la existencia de error grave en el cómputo de votos realizado en la casilla identificada como 163 E1, lo que constituye una irregularidad grave en el acta de escrutinio y cómputo que pone en duda la certeza de la votación y es determinante para el resultado de la misma.

Ello, precisa, puesto que en dicha acta se asentó por los miembros de la mesa directiva que se habían depositado doscientas ochenta y nueve (289) boletas, en tanto que la votación total ascendió a trescientos ochenta y dos (382) votos, lo que se traduce en una inconsistencia de noventa y tres (93) sufragios, suficiente para acreditar la determinancia, atento que la diferencia entre el primero y segundo lugar en dicha casilla, es de treinta y un (31) votos.

Así, concluye que la responsable desestima en forma inadecuada su planteamiento, al considerar para su decisión la corrección de la cifra de boletas depositadas en la urna, por parte del secretario del Consejo Municipal de Villa de Álvarez, Colima, durante el desarrollo de la sesión de cómputo distrital correspondiente; y

b) Que resulta cuestionable que habiéndose acreditado que en la casilla 163 C6 se permitió votar a dieciocho (18) personas, sin tener credencial para votar, ni asentar sus datos en lista alguna, el tribunal responsable haya determinado que tal irregularidad no era determinante para el resultado de la votación, pues no toma en cuenta que la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido criterio en el sentido de que en ciertos casos, cuando puede variar el resultado de una elección, es decir, que cambie el ganador, procede la nulidad de la votación recibida en una casilla, aunque en ésta no sea determinante la irregularidad.

Los argumentos previamente sintetizados son **infundados**, conforme a los razonamientos jurídicos que se exponen enseguida.

Por lo que respecta al agravio identificado con el inciso a), resulta **infundado** pues contrariamente a lo que sostiene la coalición actora, de las constancias de autos es posible concluir la inexistencia de error en el cómputo de los votos en la casilla cuestionada.

[...]

Finalmente, por cuanto hace al agravio identificado con el inciso b), éste deviene igualmente **infundado**, pues como acertadamente sostuvo el tribunal responsable, la irregularidad acreditada en la casilla **163 C6** no es determinante para el resultado de la votación en ella recibida, ni para el de la elección que nos ocupa, como se demuestra a continuación.

[...]

En las relatadas condiciones, ante lo **infundado** de los agravios expresados por la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima” y el Partido Revolucionario Institucional, **procede, en la materia de impugnación, confirmar** la sentencia reclamada, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima el veintitrés de julio de dos mil nueve, que confirmó los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; así como la declaración de validez de la elección y el consecuente otorgamiento de la constancia de mayoría, hechos por el Consejo Distrital del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, en el distrito electoral VIII, con sede en Villa de Álvarez, a favor de la fórmula común de candidatos propuesta por los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.

[...]